

Del jarro al puñal: el ocaso de la educación chilena

Cristóbal Osorio
 Profesor de Derecho Constitucional
 Universidad de Chile



En 2008, en medio de las movilizaciones estudiantiles, María Música Sepúlveda, de 14 años, frustrada con la ministra de Educación le arrojó el agua de un jarrón. Ese día pasamos de la “democracia de la deferencia” a la “democracia de la impugnación”.

Si el “jarrazo” de 2008 simbolizó la rebelión contra un sistema de educación de mercado y la rigidez de un modelo segregador, el crimen de Calama revela una descomposición profunda.

Todo era previsible. Según la Superintendencia de Educación en 2025 hubo un récord de denuncias en materia de convivencia escolar con 17.076 casos, lo que representa un alza del 39,4%. Por su parte, el Índice de Bienestar Docente 2025 revela un escenario alarmante: 40% de los profesores reporta haber sido agredido por alumnos.

Un deterioro que también se expresa en el ámbito legal. Pasamos de la Ley SEP de 2008 –que soñaba con la equidad técnica– a la Ley de Inclusión Escolar de 2015, que terminó convirtiendo al director en un actuario de rendiciones de cuentas infinitas, siendo los colegios un nuevo espacio burocrático. Luego, la Ley Aula Segura (2018), que dio un giro punitivo, para pasar –como si fuera poca la inflación legislativa– a la Ley de Convivencia y Buen Trato de 2026; un intento por legislar el afecto, el respeto y sustentar nuevas medidas preventivas acorde a las tecnologías, mientras el territorio se desmorona.

Una imagen muy lejana de la gran promesa que la Educación permitiría al país convertirse en tierra de oportunidades, donde el mérito y el esfuerzo serían premiados, sin importar el origen.

En suma, los hechos de Calama terminan por hacer añicos el sueño de la escuela como ágora de emancipación social, y refrenda las impresiones del rector Carlos Peña cuando dice que el sistema remedia la estructura de clases y se erige como una falsa promesa. Hoy se puede asegurar que el colegio de origen es el mayor indicador de éxito social.

Algo que se avizora incorregible, al menos en el corto plazo, dado que el sistema educacional se convirtió en el coto de caza de la competencia de la izquierda y derecha, obsesionadas con hacer de la Educación un territorio para probar rancias doctrinas. Así, el debate sucumbe ante consignas reactivas o experimentos de ingeniería social que evocan la lógica de nivelación hacia abajo de los “patines” de Eyzaguirre.

En una perspectiva de política pública, el desafío trasciende a la mera gestión de la crisis. Se requiere un diagnóstico que sincere la metástasis institucional, para luego así exigir un acuerdo político transversal que rescate la educación de la lógica electoral. Chile se encuentra atrapado en un pantano ideológico omitiendo que la violencia escolar es el síntoma final de un Estado que abdicó de su rol garante de la convivencia.

Sin una restauración de la autoridad pedagógica y una política de Estado que aborde las raíces sociológicas del conflicto, el aula seguirá siendo el espejo de nuestra propia descomposición civilizatoria.